

**De:** HECTOR JULIO RIOS JOVEL <hjrios103@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 1 de abril de 2024 11:01 a. m.  
**Para:** responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co; Jose.gongora@contraloria.gov.co  
**Asunto:** URFR PRF-044-2019 - RECURSO DE APELACIÓN - MUNICIPIO DE VILLAGARZON - ING. JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA Y OTROS -  
**Datos adjuntos:** 4- RECURSO APELACION PRF 044 -2019 - VILLAGARZON . ING. JUAN CARLOS PATARROYO.pdf

Neiva - Huila, 1 de abril de 2024

Señores

**SALA FISCAL Y SANCIONATORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

[cgr@contraloria.gov.co](mailto:cgr@contraloria.gov.co)

[responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co)

E. S. D.

Ref.	PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.
Radicación:	"No. URFR PRF-044-2019".
Presunto Responsable:	Ing. JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA Y OTROS
Asunto:	RECURSO DE APELACIÓN

Cordial y atento saludo:

**HÉCTOR JULIO RÍOS JOVEL**, mayor, vecino de Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía 12.125.383 de Neiva – Huila y con tarjeta profesional 191.268 C.S.J., actuando en calidad de apoderado de confianza del Ing. Civil JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA, comedidamente, me permito proponer **RECURSO de APELACIÓN** contra el AUTO No. 503 del 19 de marzo de 2024 - "A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVEN SOLICITUDES DE NULIDAD PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFRPRF-044-2019", en el que se resolvió: ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR SOLICITUD DE NULIDAD promovida por JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA a través de su apoderado de confianza., de conformidad con lo siguiente.

**HECTOR JULIO RIOS JOVEL**  
INGENIERO CIVIL U.G.C. – ABOGADO U.C.C.  
ESP. EN ADMON DE OBRAS CIVILES -E.A.N.  
ESP. CONTRATACIÓN ESTATAL - U.E.C.

ESP. EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE – U.E.C.  
ESP. EN DERECHO ADTIVO Y CONSTITUCIONAL - U.C.C.  
ESP. EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Neiva - Huila, 1 de abril de 2024

Señores

**SALA FISCAL Y SANCIONATORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

cgr@contraloria.gov.co

responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co

E. S. D.

Ref.	PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.
Radicación:	"No. URFRPRF-044-2019".
Presunto Responsable:	Ing. JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA Y OTROS
Asunto:	RECURSO DE APELACIÓN

Cordial y atento saludo:

**HÉCTOR JULIO RÍOS JOVEL**, mayor, vecino de Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía 12.125.383 de Neiva – Huila y con tarjeta profesional 191.268 C.S.J., actuando en calidad de apoderado de confianza del Ing. Civil JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA, comedidamente, me permito proponer **RECURSO de APELACIÓN** contra el AUTO No. 503 del 19 de marzo de 2024 - "A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVEN SOLICITUDES DE NULIDAD PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFRPRF-044-2019", en el que se resolvió: ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR SOLICITUD DE NULIDAD promovida por JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA a través de su apoderado de confianza., de conformidad con lo siguiente:

**(i) Motivos de Inconformidad**

Para los efectos legales de los fundamentos sobre los cuales fundamentamos el presente RECURSO correspondieron en forma "expresa" al siguiente panorama, debidamente expuesto en la petición de nulidad, el cual, no fue resuelto en su integridad (FONDO) como correspondía: "De tal suerte, que advertido lo anterior, al existir preceptos de orden legal como los ilustrados, y que se avizoran desconocidos por el órgano de control fiscal, frente a la oportunidad, de: **1.- Haber podido participar en la visita técnica desplegada y 2.- Tener la oportunidad de poder controvertir** (Solicitar ACLARACIONES – COMPLEMENTACIONES O CONTRADECIR) el INFORME TÉCNICO dentro del término que otorgara el mismo órgano de control fiscal se consagra de forma "plena y de

fondo" la causal expresa invocada de NULIDAD". (El Subrayado y Las Negrillas Son Nuestras). (Visto a Folio 3 Escrito de Petición de Nulidad).

Frente a lo antes ilustrado, se puso a consideración del órgano de control fiscal un panorama "claro y conciso", el cual, debió proporcionar su subsanación de su parte.

En ese sentido, tenemos lo siguiente:

### **1.- "HABER SIDO EXPEDIDO POR FALTA DE MOTIVACIÓN"**

Legales, la motivación insuficiente, corresponde a un "vicio de ilegalidad del acto administrativo", puede estructurarse como se probará cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en imprecisiones de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son incompletos o insuficientes o, cuando existiendo estos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico como se presentan en el caso que nos ocupa. En primer caso, se genera el error de hecho y, en el segundo el de derecho.

La motivación insuficiente como vicio del acto administrativo trae como consecuencia la anulación del acto, ya sea en sus consideraciones de hecho o de derecho.

Además, es claro, que la insuficiencia de los motivos es causa de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que, la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar, es causal también de anulación del acto por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del mismo.

La jurisprudencia al respecto ha establecido:

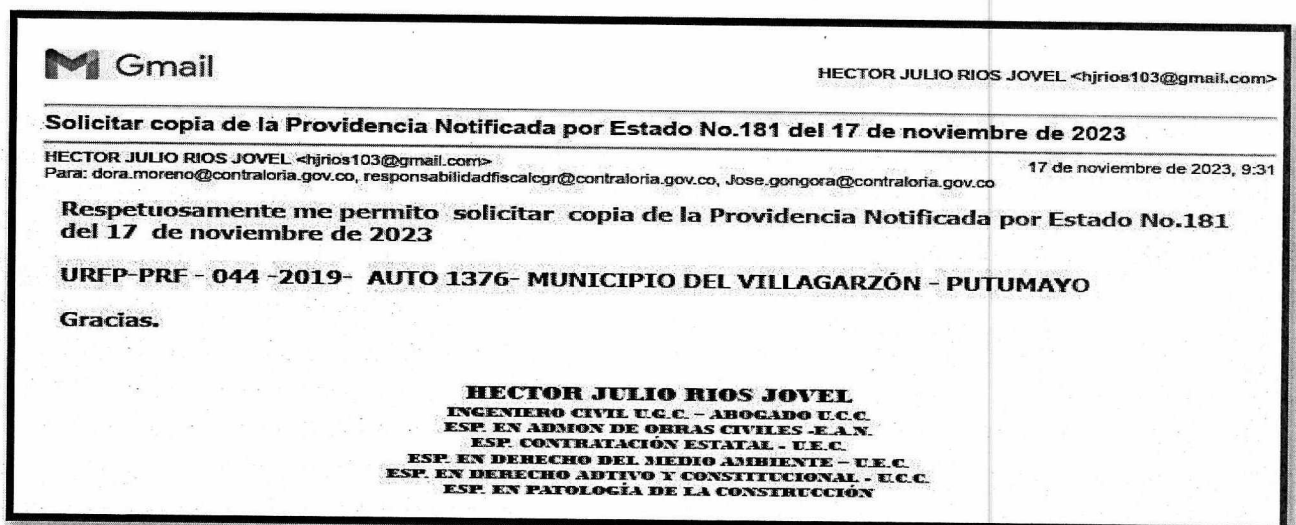
*"Hay que distinguir entre falsa motivación materialmente insuficiente. El primer concepto sugiere la idea de falsificación voluntaria y dolosa de la verdad, lo que puede implicarla afirmación de que el funcionario ha cometido un delito: la cuestión debe llevarse, entonces, al conocimiento de la justicia penal para los fines consiguientes.*

*La idea de motivación materialmente insuficiente puede constituir una desviación de poder del respectivo funcionario, pues si el acto se dicta por motivos inexistentes o incompletos en realidad carece de motivos, significando que quien lo profirió no 'obró en función de buen servicio sino caprichosamente, lo cual es inaceptable "*

Si el acto administrativo es motivado insuficientemente carece de legitimidad y, por ende, no hace surgir para el funcionario la facultad de hacerlo ejecutar, para el caso que nos ocupa veamos:

Al analizar los motivos en los que se fundamenta la providencia recurrida al adoptar la decisión, encontramos que "únicamente" baso su decisión dejando sin mencionar y valorar, como se hizo alusión en el punto anterior, a la referente, a no haber tenido la oportunidad de: **1.- Haber podido participar en la visita técnica desplegada.** De tal suerte, que no fue adecuada (COMPLETA – DE FONDO) la forma como nos ha sido resuelta la petición de Nulidad y, por lo tanto, consideramos deben darse las ilustraciones (aclaraciones) por las cuales, no se nos allego la información (AUTO), una vez, se produjo la programación de la visita técnica, violentándonos el derecho de defensa y contradicción a todas luces de forma "clara y precisa" como se aprecia.

Y para ello, encontrando una serie de elementos probatorios que dan fe de la solicitud de esta información que reposan en el expediente, entre las que podemos citar la solicitud de fecha 17 de noviembre de 2023 (radicación: 2023ER0219271), la cual, no fue resuelta en su oportunidad, ni mucho menos a la fecha de la presente actuación. Con otras palabras, no fuimos conocedores (IGNORADOS) de la forma como se dio la trazabilidad de la visita técnica programada mediante AUTO 1376 del 16 de noviembre de 2023, para que así mismo mi representado pudiera desplegar toda su logística para tener la oportunidad de participar en la misma. (Ver Anexos Petición de Nulidad).





# HECTOR JULIO RÍOS JOVEL

ABOGADO – ESPECIALIZADO

CONTRATACIÓN ESTATAL – DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL  
DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE – DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL



HECTOR JULIO RIOS JOVEL <hjrios103@gmail.com>

## SIGEDOC/El correo ha sido radicado en la Contraloría General de la República

usuarioSGD@contraloria.gov.co <usuarioSGD@contraloria.gov.co>  
Para: HECTOR RIOS <hjrios103@gmail.com>

17 de noviembre de 2023, 11:

ACUSO DE RECIBO SU CORREO ELECTRÓNICO.

La Contraloría General de la República le informa que su correo con asunto "Solicitar copia de la Providencia Notificada por Estado No.181 del 17 de noviembre de 2023" ha sido radicado en el sistema de gestión documental

El número de radicación con el que puede hacerle seguimiento es: 2023ER0219271

[El texto citado está oculto]

Dado lo anterior, se expresa de forma clara y precisa y categóricamente que el AUTO recurrido se aparta, tanto en su forma como en el fondo de los requisitos necesarios e indispensables para que se pueda resolver de la forma como se produjo.

De acuerdo con lo anterior, podemos señalar, que la motivación de la providencia objeto del presente recurso carece de sustento y por consiguiente resulta insuficiente, pues el órgano de control fiscal adopta una decisión sin contener como se ha señalado elementos que soporten o sustenten las omisiones cometidas por el órgano de control fiscal, desatando una clara violación a los preceptos constitucionales entre los que se pueden citar el **DERECHO A LA DEFENSA Y CONTRADICCIÓN – (DEBIDO PROCESO)**, por lo que el acto administrativo pierde todo su peso, incurriéndose en un error de hecho y de derechos en la apreciación valorización de los hechos, de las pruebas e incurrir en ilicitudes sustanciales.

Ahora bien, los actos administrativos como el recurrido para que tengan fuerza vinculante deben en su formulación cumplir con el lleno de ciertos requisitos formales, en tal sentido la motivación ha de **ser suficiente, real y ser consecuente con la decisión adoptada**, ello determina el perfeccionamiento del acto administrativo. La motivación pone de manifiesto la "juridicidad" del acto, acreditando que en el concurren las circunstancias de hecho y derecho que justifican su expedición", lo que para el caso en estudio no se configuro.

En consecuencia, es claro que la providencia en cuestión que por medio de presente escrito se impugna está motivado en forma insuficiente, toda vez que el órgano de control fiscal, en la parte motiva del AUTO recurrido, no ha

establecido los elementos necesarios para informar en forma clara, lo cual hace a luz de la legislación vigente que el acto administrativo carezca de fundamento real y probatorio, estaríamos entonces frente a un evidente abuso de poder, en todo rechazado por el ordenamiento jurídico preestablecido.

### **EN ESTE ASPECTO SE CONCLUYE:**

Si el acto administrativo es motivado en forma insuficiente, como lo es, del caso que nos ocupa, carece de legitimidad y, por ende, no hace surgir para el funcionario la facultad de hacerlo ejecutar.

El Consejo de Estado en sentencia de fecha julio 2 de 1989 ha dicho:

*“La motivación debe ser seria, adecuada suficiente y además íntimamente relacionada con la decisión que por ella se tome.*

*Para garantizar el principio de legalidad de los actos administrativos el legislador ha exigido la adecuada y suficiente motivación de los mismos, **de manera seria, real, cierta y determinante, congruente y adecuada no solamente en la norma que lo autoriza, sino también proporcional a los hechos que le sirven de causa**”.* (El subrayado y Las Negritas son nuestras)

Así las cosas, se hace necesario recordar aquí lo manifestado por el Consejo de Estado de auto de marzo 9 de 1971, en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

***“Ha sostenido el Consejo de Estado que en todo acto administrativo existen ciertos elementos esenciales de los causales depende su validez y eficacia. Estos elementos son el órgano competente, voluntad administrativa contenido, motivos, finalidad y formas. En lo que se refiere a los motivos ha expresado la corporación que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en cuenta las circunstancias de hecho o de derecho que en cada lapso la determine a tomar unas decisiones”.*** (Negrilla fuera del texto)

La insuficiencia de los motivos es causa de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que, la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar, es causal también de anulación del acto por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del mismo.

Hoy se contempla como causal autónoma de Nulidad del Acto Administrativo en la Ley 1437 de 2011, la indebida motivación.

Y así, lo ha reiterado la H. Corte Constitucional:

*"La motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico"<sup>1</sup>.*

Se desprende de lo anterior, que el AUTO que se impugna no puede ser llamado a producir efectos jurídicos. Los actos administrativos para que tengan fuerza vinculante deben en su formación cumplir con el lleno de ciertos requisitos formales, en tal sentido la motivación ha de ser suficiente, real y ser consecuente con la decisión adoptada, ello determina el perfeccionamiento del acto-administrativo.

Por lo anterior debidamente expuesto el AUTO No. 503 del 19 de marzo de 2024 debe ser REVOCADO.

## **2.- "VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO"**

Las normas que orientan los tramites o procedimientos administrativos del Estado son de orden público y por ende de obligatorio cumplimiento; sin embargo, al proferir el AUTO No. 503 del 19 de marzo de 2024 acusado se pretermitió EL DEBIDO PROCESO, viciándolo por lo que merece ser revocado.

El artículo 29 de la CN señala: *"debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas"*. La contratación estatal es una actuación administrativa, y por ende no puede ser ajena a la aplicación de este principio – derecho. Así lo han dicho las Altas Cortes:

*"La Constitución Política consagra el debido proceso como un derecho de rango fundamental y garantiza su observancia no sólo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino en las de índole administrativo. Esa garantía constitucional se traduce en el respeto de la administración a las formas previamente definidas, a la salvaguarda de los principios de contradicción e imparcialidad, y a la garantía de que la actuación administrativa se surtirá respetando todas sus etapas y ajustándose al ordenamiento jurídico legal y a los preceptos constitucionales. Con ello se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos*

---

<sup>1</sup> - Sentencia T-204/12



administrativos que no resulten arbitrarios y contrarios a los principios del Estado de derecho. Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.

En consecuencia, el derecho al debido proceso administrativo garantiza a las personas la posibilidad de acceder a un proceso justo y adecuado, en el cual tengan derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. Sobre el debido proceso administrativo la Corte ha precisado que su cobertura se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cubra todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares, y a los procesos que adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos".

"La Sala ha considerado, cada vez con más decisión y argumentos, que las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales también están regidas por el derecho fundamental al debido proceso -art. 29 CP-, en virtud del cual se debe garantizar a los afectados con una decisión el derecho a defenderse adecuadamente, es decir, en los términos de las garantías mínimas que contempla este derecho... Entre otras cosas, recientemente concluyó esta Sala, al juzgar la validez del artículo 87 del decreto 2.474 de 2008, que no es posible que mediante normas internas se establezca el procedimiento sancionatorio contractual. Se fundamentó en que sólo la ley puede regular el tema, por tratarse de una materia reservada al legislador, y que mientras esto no ocurra se deben aplicar las reglas del Código Contencioso Administrativo... En conclusión, se reitera que el debido proceso rige en las actuaciones administrativas contractuales por disposición constitucional -art. 29-, de allí que el art. 17 debe apreciarse como un impulso, exhortación y respaldo que el legislador le ofrece para que, sin más demora, se introduzca con toda la fuerza en este ámbito del derecho administrativo, que históricamente ha sido reacio a protegerlo sin condiciones especiales. Así, las dudas que injustificadamente mantienen algunos, sobre la necesidad de aplicar este derecho en materia contractual, quedaron despejadas. Ahora bien, vale la pena destacar que al poco tiempo de proferirse esta providencia se expidió el nuevo Código Contencioso Administrativo -ley 1.437 de 2011-, que inspirado en la Constitución Política, y en el lamento general

*que demandaba la actualización del procedimiento administrativo al derecho fundamental al debido proceso, dispuso en el art. 3 que, efectivamente, debían considerarse todos los principios en dichas actuaciones... De esta manera, la nueva normativa, que entrará a regir el 2 de julio de 2012 -art. 308-, pone el ordenamiento jurídico administrativo a tono con la Constitución Política, concretamente en lo que tiene que ver con las actuaciones ante la administración, porque la reivindicación del art. 29 CP., convertido en principio rector de estos procedimientos, marca un hito en el tratamiento legal de la materia. Incluso, la no reformatio in pejus, de más difícil aceptación y adaptación por parte de la administración, y también de la jurisprudencia, ha sido ratificada en esta norma, para evitar dudas al respecto".*

Para el caso concreto, el DEBIDO PROCESO se violó una vez se dieron las siguientes circunstancias "ilegales" por parte del operador fiscal:

Se producen como lo advertimos dos (2) escenarios de connotación **"irregular"** que atentan contra los intereses de mi patrocinado, de la siguiente forma: en cuanto, a que no se tuvo la oportunidad de: **1.- Haber podido participar en la visita técnica desplegada y 2.- Tener la oportunidad de poder controvertir.**

Es claro, que los derechos consagrados desde nuestra norma superior esencialmente lo preceptuado en el artículo 29 en coherencia (concordancia) con las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, han sido altamente violentadas por el órgano de control fiscal, irrumpiendo en no brindar las plenas garantías que le asisten a mi patrocinado al negarle el derecho de su participación en las etapas antes ilustradas. (Ver documentos ANEXOS Petición Nulidad).

En este aspecto, se concluye, lo siguiente:

Encontramos con claridad absoluta, lo dispuesto en el Artículo 29 de la norma superior, en consideración a que toda actuación debe ser objeto de las normas preexistentes y por consiguiente NO a pretender su desconocimiento, sin ningún fundamento de tipo legal.

En tan sentido, deben agotarse en debida forma todos y cada una de las etapas consagradas en las normas citadas con anterioridad para acceder en debida forma, si a ello, hay lugar, a ser juzgado, conforme las disposiciones legales **"invocadas"** para el caso que nos ocupa. Es decir, deben surtirse los

procedimientos para que se llenen los vacíos de la falta atender las solicitudes de información de las etapas procesales indicadas.

De tal suerte, que, al no brindar las garantías previstas desde nuestro ordenamiento superior, el cual, deriva la norma reguladora de este tipo de procesos Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, sobre lo cual, se produjo la providencia aquí recurrida, se extralimita (Abuso de Poder) en sus actuaciones el órgano investigador. De tal forma, que este actuar se atenta contra los intereses de mi representado.

En ese orden de ideas, invocando el PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD que no es otra cosa más que se brinden garantías a los presuntos responsables en el caso en estudio, y observando un adecuado DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN al NO darse la connotación que representan los elementos probatorios mencionados en el presente acápite, se violenta delicadamente el DEBIDO PROCESO.

En ese orden de ideas, debe procederse a REVOCAR el AUTO No. 503 de fecha 19 de marzo de 2024, aquí RECURRIDO, dadas las consideraciones debidamente expuestas en el presente acápite.

### **3.- “INDEBIDA VALORACION DE ELEMENTOS PROBATORIOS PARA DEMOSTRAR LA NULIDAD”.**

En una providencia, debe estar probado con “CERTEZA<sup>2</sup>” la falta y la prueba de este por supuesto, debe corresponder a los medios de prueba consagrados en nuestra legislación, a la que en apoyo habrá de acudir la ley de responsabilidad fiscal en virtud del expreso mandato de dicho cuerpo normativo.

Remisión a otras fuentes normativas. En los aspectos no previstos en la presente ley se aplicarán, en su orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso disciplinario. En materia de policía judicial, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

Haciendo un examen general de estas disposiciones en cuanto a los medios de prueba legalmente consagrados, tendríamos que concluir que la

<sup>2</sup> - (Consejo de Estado, Sección primera, sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-000- 2010-00706-01 CP. María Elizabeth García González.)

valoración efectuada por el órgano de control fiscal, en cuanto a lo relacionado con los hechos cuestionados, NO corresponden a un análisis objetivo de la materia; toda vez, que NO se aprecia un análisis la totalidad de los documentos que obran tanto en el expediente como los allegados con la petición de nulidad para establecer las diferentes razones de la petición de nulidad.

Así las cosas, conforme lo manifestado, se deberá apreciarse conforme lo señala el artículo 26 de la ley 610 de 2000:

**ARTÍCULO 26. APRECIACION INTEGRAL DE LAS PRUEBAS.** *Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.*

El análisis "objetivo" de las pruebas documentales allegados consistente en análisis de todo su contexto, para el caso en estudio, brilla por su ausencia.

Obsérvese, que brillan por su ausencia la valoración adecuada y objetiva a este tipo de pruebas, lo que redundo en que se pierdan las garantías del presunto implicado. De las pruebas aquí mencionadas, NO se hace alusión en ninguno de los apartes del AUTO, violentando de forma descomunal el DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION que le asiste a mi representado.

En ese orden de ideas, **Las pruebas deberán apreciarse en conjunto bajo la órbita de la persuasión racional,** lo que para el caso en estudio NO aconteció, como se puede apreciar claramente y, por el contrario, se desconocieron sendos elementos probatorios que dan claridad de las actuaciones de mi patrocinado.

Ha de tenerse en cuenta, que existen elementos probatorios en el proceso, que han sido omitido considerarlos, no los advirtió y los más preocupante no se tuvieron en cuenta para fundamentar la decisión. Es decir, en este caso es evidente que debió haberse realizado su análisis integral del material probatorio existente y una valoración de la decisión del asunto variara sustancialmente, dado, que allí, se da suficiente claridad a la actuación de mi representado.

De tal forma, que se presenta "error en el juicio valorativo de la prueba" ya que es ostensible, flagrante y manifiesto, desatando una incidencia directa en la decisión de grandes proporciones; como quiera, se omite la valoración de documentos obrantes en el proceso se consolidan como actores directos del procedimiento administrativo sancionatorio referenciado.



En lo aquí advertido, se deja expresa constancia, que NO se dio el valor probatorio que ameritan esta clase de pruebas, puestos aquí de presente, sino a todos y cada uno de los allegados al proceso, configurando el "error jurídico avisado".

Así las cosas, debe procederse a conceder de forma favorable el recurso aquí impetrado; como quiera, que, de conformidad con lo señalado, en el presente contenido, encontramos un "yerro" de grandes dimensiones que conllevan a que se haya tomado una decisión "errada" en contra de los intereses de mi patrocinado, sin brindarle las garantías consagradas en nuestro ordenamiento jurídico.

### **(ii) Petición**

Por las razones expuestas, comedidamente le solicito se sirva REVOCAR el AUTO 503 del 19 de marzo de 2024 – "A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVEN SOLICITUDES DE NULIDAD PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFPRF-044-2019" accediendo de forma favorable a la petición de nulidad donde se puedan garantizar los derechos que le asisten a mi patrocinado.

Atentamente,



**HÉCTOR JULIO RÍOS JOVEL**  
C.C. No. 12.125.383 de Neiva – Huila.  
T.P. No. 191.268 C.S.J.